

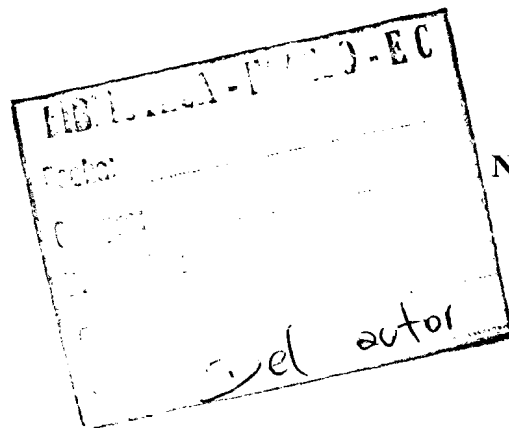
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales- Sede Ecuador

Maestría en Ciencias Sociales - Estudios Políticos

17007

PODER Y DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE CRISIS.

Política comparada de la caída de Mahuad y Fujimori.



Napoleón Saltos Galarza

Director de tesis: Fredy Rivera

Quito, enero 2005

INDICE

INDICE	pág.	I
PRESENTACIÓN	pág.	1
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN: OBJETO Y METODOLOGÍA	pág.	5
El objeto: hegemonía y crisis de la democracia liberal		4
Los análisis teóricos		8
El debate		12
Excurso sobre la utilización de las teorías de Habermas		15
Metodologías		19
El debate sobre la democracia		19
Estudios comparados		21
Elementos para un marco analítico del discurso sobre la democracia		23
Elementos para el estudio de las trayectorias de la democracia		28
CAPÍTULO II. EL DEBATE TEÓRICO SOBRE LA DEMOCRACIA	pág.	35
La cuestión		35
El debate sobre la democracia		38
Las macroteorías		38
Las concepciones liberales de la democracia		42
Las concepciones minimalistas		43
Las visiones ampliadas		49
La concepción liberal y la concepción republicana		54
De Occidente a la periferia		58
CAPÍTULO III. LA DEMOCRACIA EN LOS PAISES CENTRALES Y EN LA PERIFERIA	pág.	60
La democracia en el capitalismo tardío		60
Cambio de época		60
Del eje autoritarismo-democracia, al eje Estado-sociedad		62

La nueva hegemonía	63
Las búsquedas teóricas	66
Los problema de la hegemonía	67
Alternativas	69
Variaciones de la democracia occidental	71
En el Extremo Occidente	74
Las visiones latinoamericanas contemporáneas sobre la democracia	78
Democracia y dependencia	78
Las teoría de la transición	79
Las teorías de la transición en el Ecuador	80
El paso a las teorías de la gobernabilidad	81
Las teorías de la gobernabilidad en el Ecuador	81
La securización de la política	83
CAPÍTULO IV. PERIODIZACIÓN POLÍTICA. TEORIA DE LA CRISIS	pág. 88
Ecuador y Perú	88
La crisis	91
La crisis política en Perú	92
La crisis política en Ecuador	99
CAPÍTULO V. LA TRAYECTORIA Y LA CAÍDA DE FUJIMORI	pág. 103
El ascenso	103
La transformación del espacio político	106
Periodización político-económica	112
Legitimidades cruzadas	114
La institucionalidad	116
El poder de Fujimori	119
El eje: Montesinos-Fujimori	123
El desgaste	124

2000: triunfo sin legitimidad	126
Los hechos se precipitan	128
El discurso de la renuncia	130
La transición	131
El sucesor	132
CAPÍTULO VI. LA TRAYECTORIA DE MAHUAD	pág 134
La entrada	134
Breve digresión teórica	135
El sistema electoral	138
El sistema de partidos	146
El sistema político	147
De la democracia a la gobernabilidad	151
La Democracia Popular	155
La gobernabilidad	156
Y sin embargo	159
Nuestra burbuja	160
Una crisis anunciada	163
El salvataje bancario	165
Una crisis integral	171
CAPÍTULO VII. DEMOCRACIA Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN ECUADOR	pág. 173
Teoría política y práctica política	173
Los signos de los tiempos	174
Dos concepciones	176
Un sistema político excluyente	179
La democracia calificada	182
De la desobediencia civil al derecho a la insurrección	182

Los discursos y las estrategias en la rebelión del 21 de enero	186
Las interpretaciones después del 21	192
CAPÍTULO VIII. 21 DE ENERO: ¿GOLPE O REBELIÓN?	pág. 195
La diferencia	195
La disputa de sentido	201
El detonante: la corrupción	203
La trayectoria, los actores, las estrategias	206
La estrategia insurreccional: el doble poder	206
El Plan B	215
El golpe militar	218
Tres retóricas sobre el Plan A	220
El poder del sistema	221
El estiramiento constitucional	225
CAPÍTULO IX. ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA MEDIA DE LA DEMOCRACIA	pág. 228
El triunfo de la democracia liberal	228
El debate teórico	229
La comparación: democracias centrales y periféricas	230
Del desencanto al reconocimiento de las diferencias	233
La crisis de vela	235
Los procesos históricos	236
En conclusión	241
BIBLIOGRAFÍA CITADA	243

Capítulo 8

EL 21 DE ENERO: ¿GOLPE O REBELIÓN?

LA DIFERENCIA

Mahuad crece a la sombra de los partidos, sustenta su poder en la alianza de la representación política de los dos polos del bloque dominante, el PSC y la DP; busca la consolidación en el tratamiento del problema limítrofe con el Perú, bajo el auspicio del poder norteamericano; pero termina atrapado en la crisis bancaria y en la ruptura de la alianza.

En la brecha de esta contradicción emerge un nuevo bloque histórico, encabezado por el movimiento indígena, con participación de los movimientos sociales: un proceso tardío de “movimientismo” que llega a los bordes del poder, con apoyo de una fracción militar.

El desenlace del 21 de enero del 2000 se presenta, a la vez, como la derrota de la rebelión popular; aunque la derrota se opera más bien posteriormente, en la contrarespuesta del poder constituido para quebrar la alianza de los pueblos indígenas con los movimientos sociales y en la desarticulación de la propuesta de Estado plurinacional y de refundación de la República. Y como la oportunidad para el bloque dominante de llevar el modelo hacia una nueva fase, marcada, por la dolarización y la financierización de la economía y por el funcionamiento de una democracia que se inmuniza a las presiones sociales y recoloca el funcionamiento del sistema político en los juegos de los dos polos del poder constituido. Mahuad es el trofeo de los dos lados. La sucesión se opera ante el poder militar, con legitimación tardía en el parlamento.

Fujimori crece como *outsider*, en medio de la crisis del sistema de partidos: primero la polarización y el desgaste del espacio “movimientista”, y luego la debacle de los partidos tradicionales. Sustenta su poder en la alianza con las cúpulas militares y empresariales, sin la intermediación de la representación política, y en el respaldo y aval del poder norteamericano. Surge por la confluencia de dos procesos: el debilitamiento y crisis del sistema de representación, tanto de los movimientos sociales como de los partidos políticos, y la ausencia de un bloque histórico alternativo, en particular, la limitación en la constitución de un sujeto político andino; por lo cual recoge legitimaciones tanto del lado carismático como desde la formalidad democrática. Se sustenta en los éxitos temporales del proyecto neoliberal, basado en la privatización de los recursos públicos, la flexibilización laboral y la alta concentración de la riqueza en las élites empresariales y militares adictas; y en la alianza geopolítica con el poder norteamericano.

El agotamiento del éxito neoliberal y la ruptura de la alianza con el poder norteamericano inician la caída de Fujimori, que se resuelve en el espacio institucional del Congreso, con participación subordinada de la movilización social. El heredero es un nuevo *outsider*, esta vez orgánico.

La palabra

Un elemento diferencial de la caída de Mahuad respecto a la caída de Fujimori, está en la emergencia del movimiento indígena a la cabeza de un nuevo bloque histórico. Sin

embargo, no existe una versión propia de las organizaciones indígenas y de los movimientos sociales sobre los acontecimientos del 21 de enero.

Hay diversos textos sobre la palabra indígena y de los movimientos sociales, en algunos casos, éstos logran expresar su voz como parte de estos textos; pero no hay la palabra autónoma. Apenas hay un texto elaborado desde la reflexión de los actores sociales, *La rebelión del arcoiris*, editado por la Fundación José Peralta (2001). Este retraso en cuanto a la reflexión y elaboración teóricas desde los actores sociales dificulta el análisis del proceso.

La tentación podría ser tratar de llenar el vacío desde la reconstrucción de los relatos, a través de investigaciones tardías sobre las visiones de los actores respecto a los acontecimientos. En realidad he acudido a algunas entrevistas a los actores; pero he preferido privilegiar una dirección diferente: tomar como referencia las trayectorias y los relatos que actuaron durante los procesos, para reconocer los campos de fuerza y de sentido constituidos. Introduzco también varios elementos testimoniales, al haber sido testigo y actor de los acontecimientos.

Hay cuatro tipos de textos: los relatos periodísticos, los relatos de los actores tanto del lado del poder como del lado de los insurrectos, las opiniones e interpretaciones, y los análisis teóricos.

Hay un déficit de análisis teórico sobre los acontecimientos del 21 de enero. Uno de los pocos trabajos en esta dirección es el de Gabriela Córdova (2003), *Anatomía de los golpes de Estado. La prensa en la caída de Mahuad y Bucaram*. Realiza una comparación de la retórica de los medios de comunicación en las dos caídas.

Mientras al 21 de enero se lo califica como “viernes negro,... comedia bufa, pesadilla monstruosa, jornada trágica, golpismo, atentado contra la democracia; en contraste, la movilización de febrero de 1997, que anunció el fin del gobierno de Abdalá Bucaram..., fue descrita como revolución de las conciencias, amanecer de la dignidad, carnaval multicolor, campanada democrática, plebiscito espontáneo del pueblo...”¹

La pregunta es “¿Por qué una movilización popular fue aclamada en 1997 y otra semejante es estigmatizada en 2000?” La respuesta está en la tesis central: “las técnicas utilizadas por la comunicación de masas descubren en las mass-media contemporáneos a factores de formación de instancias políticas representativas, estimulan la movilización social y, al mismo tiempo, la enmarcan en la institucionalidad o en sus símbolos; todas éstas son funciones que rebasan el campo de lo periodístico y lo han convertido en un importante pilar del orden imperante.” El poder de los mass-media contemporáneos construye una democracia instrumental.

Los relatos periodísticos están dominados por los grandes medios, aunque en esta oportunidad podemos cotejarlos con la voz de la radio. Destacan, de un lado, los relatos de *El Comercio*, recogidos en *21 de enero, la vorágine que acabó con Mahuad*, y del otro, el relato de Francisco Herrera, *Los golpes del poder... al aire. El 21 de enero a través de la radio*.

¹ CÓRDOVA (2003: 8)

El universo de los *mass media* es complejo y contradictorio. Sin embargo, su constitución se remite a la legitimación del poder y del mercado, hasta presentarse como un “campus”² con reglas propias. Hay un juego de eco; la voz de los *media* se amplifica en círculo: la noticia de la prensa se reproduce en la televisión, circula en las corresponsalías internacionales y rebota a los cauces locales, la imagen de la televisión regresa en el análisis de los editorialistas. La “verdad” ahora está en el eco amplificado.

Sobre todo en tiempo de crisis política, la palabra oficial se desplaza desde las instituciones políticas, los partidos y el Estado, hacia el campo de la opinión pública, dominada por los *mass media*. “A la progresiva despolitización mediática de la política ha correspondido la creciente politización de los mass-media, los cuales han abandonado su condición y modo de funcionamiento de “contra-poder” para convertirse en un poder, que usurpa competencias políticas pero sin asumir las responsabilidades del poder político... Este fenómeno generalizado en el mundo moderno se ha agravado en países como el Ecuador, donde las instituciones sociales y políticas son muy débiles”³

La autonomización de la opinión pública y la construcción de una democracia “teledirigida”⁴ es el punto culminante del predominio de la versión liberal de la democracia, es su forma postmoderna. Para Rousseau la opinión pública era el campo de constitución de la soberanía popular, pero para ello se requería su funcionamiento como contra-poder y vigilancia ciudadana. Hoy, los *mass media* actúan como parte del poder constituido; y sobre todo en tiempos de crisis de la institucionalidad política, se colocan en el centro de la disputa de sentido, ordenan no sólo las agendas sino también los ritmos; entregan la palabra a “los que tienen que hablar”.⁵ Las funciones originarias de expresión de la opinión de los ciudadanos ante el poder del Estado y de sacar a la luz pública los funcionamientos de los poderes invisibles, se han trasmutado en las funciones de construir y reproducir un sentido para el poder.

Esta trasmutación es uno de los factores que incide en la constitución de espacios movimientistas en nuestras sociedades, más que de democracias ciudadanas, como pretende la visión liberal de la democracia. La incorporación del poder mediático al poder constituido cierra el paso a la constitución de democracias liberales; así como su autonomía es el piso de su constitución en los países europeos. Por ello, el paso por formas movimientistas es no sólo una originalidad de los procesos andinos, sino una condición para desarrollar nuevas formas participativas de democratización ante el fracaso de los cauces liberales.

La irrupción de los actores andinos, ya sea bajo la mediación de un *outsider*, como en el caso del Perú, o bajo la forma de la construcción de un movimiento social con presencia étnica y política, como en el caso de Ecuador, marca el carácter del poder y de la democracia en nuestros países. La representación es reordenada desde la presentación, la norma es modificada desde la acción.

La opinión pública, articulada por el poder mediático, se transmuta en la opinión “publicada”. Pero no por ello desaparecen las voces profundas y silenciadas. Más bien se abren nuevos cauces del poder: la retórica se remite a los procesos.

² BOURDIEU (1985). TÉLLEZ (2002)

³ SÁNCHEZ-PARGA (1999: 73-74)

⁴ SARTORI (2001)

⁵ BOURDIEU (1985)

Los *mass media* actúan como un *campus*: “se entrelazan, se repiten, compiten e imitan entre ellos. Constituyen un entorno donde la competencia se convierte en atmósfera mediática que envuelve al receptor... De allí la coherencia que mantienen las notas informativas con las columnas de análisis y opinión institucional de cada periódico... No es un diario, un canal de televisión o una radio quien informa, ... sus productos asumen la impronta del colectivo en el momento mismo de su concepción... Esa unidad del campo permite tratarlos como un emisor colectivo”⁶

En ese emisor colectivo entran también los artículos y libros de análisis y opinión emitidos desde el poder constituido. La cercanía a Mahuad, convierte al texto de Vladimiro Álvarez, *El golpe detrás de los ponchos*, no sólo en una lectura privada de los acontecimientos, sino en la interpretación del poder y de las perspectivas, desde el centro de la representación política, marcada por un viejo racismo occidental: la hacienda no ha concluido; los indios no tienen voz, hay que buscar el poder que los mueve, las conspiraciones tras los ponchos, para explicar los desenlaces. En el eje golpe-constitucionalismo, los actores no podían ser los indios en alianza con los movimientos sociales; los actores estaban en los cuarteles, en la trama del tradicional golpe militar. También el poder público tiene su escena privada: las visiones, los intereses, los gustos, las relaciones de los gobernantes juegan dentro del Palacio.

El viejo desprecio al indio impidió ver desde el Palacio el nuevo poder indio; hasta el momento del cerco Mahuad seguía centrado en su nueva boya, la dolarización: el “jueves 20 de enero, el Presidente Mahuad se instaló desde temprano en reuniones previamente convocadas con técnicos del Ministerio de Finanzas y expertos en materia económica para la implementación del modelo de dolarización que anunció el nueve del mismo mes.”⁷ Los informes militares señalaban que todo estaba bajo control: ¿sorpresa estratégica desde el lado indígena-social o planificación golpista desde el lado militar?.

Los textos de los militares participantes, como los libros del Coronel Mario Lascano, *21 de enero. La noche de los coroneles. Rebelión de los mandos medios*, se mueven en su propia retórica: el sentido está en el marco de las relaciones militares, de las relaciones entre los insurrectos y los mandos militares, en las relaciones entre el Ejecutivo y el poder militar.

Cada actor tiene la visión de una parte del proceso: los relatos se realizan desde un actor que se proclama como el central: “la rebelión de los mandos medios”, “la rebelión de los indios”.

Empero no hay un sujeto metafísico que está por encima del proceso; el sujeto y su conciencia se construye en el proceso; aunque en cada punto actúan los juegos sistémicos y la acción desde la voluntad de las fuerzas sociales y políticas. La política no es ni el simple funcionamiento (o disfuncionamiento) del sistema, de la jaula de hierro; ni el simple campo de tácticas y estrategias de los actores. Es un juego complejo, en donde los actores construyen la historia dentro de marcos delimitados por normas heredadas. Más que un sujeto trascendente se produce un complejo proceso de aprendizaje, para construir estrategias de conjunto.

⁶ CÓRDOVA (2002: 10 – 11)

⁷ ÁLVAREZ (2001: 17)

Para reconstituir la trayectoria y el discurso de los actores sociales insubordinados, el paso inicial será desmitificar los discursos etnicistas sobre el movimiento indígena y el silenciamiento de las presencias de otros actores sociales, en textos como el de Kintto Lucas, *La rebelión de los indios*. Cuando relata periodísticamente los hechos señala la participación de los diferentes actores sociales; pero cuando se convierte en comentarista crea una retórica centrada únicamente en el protagonismo indígena.

Aunque no se trata de un discurso aislado, sino más bien de una corriente que en el tratamiento del problema indígena elude el tema de la tierra y la desigualdad, para centrarse en el tratamiento de la “diferencia”, dentro de una problemática articulada a las concepciones de la ciudadanía, la participación institucional y la gobernabilidad.⁸

Desde esta visión, un sector oficial de la Dirección Nacional del Movimiento Pachakutik, en su balance sobre el 21 de enero, concluyó que se trataba de un “golpe” y una “derrota”, por la introducción de posiciones “extrañas” al proceso indígena.⁹ Aunque posteriormente, con el triunfo de Gutiérrez, como beneficiarios de los acuerdos, dejaron a un lado esta interpretación y volvieron al discurso de la “rebelión indígena”.

Tanto en los levantamientos de marzo y de julio del 99, como en la insurrección de enero del 2000, se constata una acción concertada en la ciudad y el campo, con la participación tanto del movimiento indígena como se otros actores sociales, con papeles y formas de lucha diferentes. No se trata únicamente de levantamientos indígenas, aunque la participación indígena es la decisiva y los diversos sectores se reconocen en su representación. En la caravana de la victoria del levantamiento de marzo, el dirigente de los taxistas proclama: “Así damos gracias a la lucha de los indígenas que vinieron aquí a pelear por todos y lograron algo que no pudieron lograr los dirigentes del transporte”¹⁰

El punto central de debate está en reconocer la confluencia de otros actores en la conformación de un nuevo bloque histórico encabezado por el movimiento indígena: no se trata de la rebelión de los indios, sino de la rebelión de una alianza indígena social, apoyada por mandos militares medios. Para ello, es necesario reconstituir la trayectoria del movimiento indígena y de los movimientos sociales a lo largo de los años 90 y no sólo mirar una parte del escenario o escuchar la voz parcial de los actores.

Una visión parcial puede terminar confluyendo con uno de los componentes de la estrategia de control desde el poder constituido: la sobreindigenización de los movimientos sociales, en una retórica que legitima la lucha indígena, siempre que se mueva dentro de los marcos institucionales, mientras descalifica la participación de los otros actores sociales, en particular del movimiento sindical público, sobre todo de las empresas estratégicas, cercado por una persistente publicidad que los descalifica como “burócratas dorados”.

La estrategia del poder sistemáticamente busca una ruptura entre la clase obrera y los demás sectores sociales populares.¹¹ Ahora esta estrategia toma la forma de la sobreindigenización de los actores sociales.

⁸ SALTOS (2002)

⁹ Documento Preparatorio del Congreso Nacional de Pachakutik, abril 2001, inédito.

¹⁰ LUCAS (2000: 57)

¹¹ FOUCAULT (1984)

La retórica de los *mass-media* sobre la participación de los movimientos sociales va desde la ilegitimación hasta la negación de su presencia. Sobre todo los diarios capitalinos, *El Comercio* y *El Hoy* se refieren a la “autodenominada Coordinadora de Movimientos Sociales”, para generar un relato en torno a la “utilización del movimiento indígena”.

Vladimiro Álvarez, Ministro de Gobierno de Mahuad, extrema este relato: “Muchos activistas que han necesitado respaldo sin merecerlo, han buscado durante todos estos años a los dirigentes indígenas, les han brindado su apoyo, se han subido al anca de sus planteamientos y han tratado de aprovecharse de sus movilizaciones creyendo ingenuamente que iban a lograr reciprocidad...”¹² Atrás de los ponchos está el poder militar; los movimientos sociales apenas son capaces de enancarse en las luchas legítimas de los indígenas. Aunque también los pueblos indígenas son apenas “una minoría”.

El objetivo central de la estrategia de sobreindigenización de los actores sociales desde los medios oficiales y el Estado, es romper la alianza de los pueblos indígenas con los movimientos sociales, de la CONAIE con la CMS, que actuó como eje del nuevo bloque histórico.

Sin embargo, las versiones oficiales construyen una retórica adicional: el poder tras los ponchos. Buscan concentrar la mirada en la actuación de los militares desde la lógica del push, para rescatar, en perspectiva, el poder de la legitimación de la democracia, como base de la reconstitución del poder. Si se reconoce el protagonismo social habrá que rechazar la idea del push, y aceptar la tesis de la rebelión popular.

El titular central del periódico *Hoy*, ligado a la visión gubernamental, en la edición del 22 de enero, el día después de los acontecimientos, resume esta retórica: “Golpe y caos”. Los actores centrales y hasta exclusivos son los militares. El juego de los generales y los coroneles está en el centro: Mendoza es el actor central, los indios apenas prestaron el poncho para encubrir los juegos de poder.

Al ser un problema militar, un “golpe”; la estrategia está orientada a la “salida constitucional”. El bastión de la democracia es el reducto último de la legitimidad del poder constituido. Al final, ya podrán condecorar a Mendoza por los servicios a la democracia.

“La lógica discursiva organizó la portada de *Hoy* sintetizando lo acontecido durante la rebelión popular en los siguientes puntos: a) un “coronelazo” desató el caos, b) el problema surgió por la reducción del presupuesto militar, c) un segundo Triunvirato consolidó el liderazgo militar con “Mendoza, el hombre fuerte”, d) a la hora del cierre de la edición se supone que “Mendoza habría dejado sin efecto lo acordado hasta media noche”, e) el diario orientó la expectativa ciudadana en “Defensa de la Constitución” ya que “la salida sólo puede darse dentro del orden constitucional”¹³

Los *media* ejercen el poder de la palabra. El primer paso es entregar la palabra a quienes deben hablar; visibilizar a los actores ordenados desde el poder constituido y silenciar la voz de los insumisos.

¹² ÁLVAREZ (2001: 24 - 25)

¹³ CÓRDOVA (2003: 60)

En el orden retórico del 22 de enero está el germen de la estrategia posterior. La historia la escriben los “vencedores”. Un hecho sintomático es que aún tres años después de los acontecimientos, en el marco del ascenso del coronel Gutiérrez a la presidencia de la República y de los debates sobre las promociones y ascensos dentro de las Fuerzas Armadas a los militares castigados por su participación en la rebelión del 21 de enero, los *media* entregan la palabra, no a los actores directos, indígenas y movimientos sociales, sino preferentemente a los actores militares: otra vez el problema se centra en la retórica del golpe y la amnistía para los militares insurrectos.

El orden del discurso político es el orden de la “defensa de la constitucionalidad”: la democracia es el principio de legitimidad y a su vez, la democracia es el cumplimiento de la Constitución y las leyes. La “pirámide jurídica” se convierte en el círculo jurídico para garantizar el orden constituido, queda por fuera toda posibilidad de un poder constituyente desde abajo.

LA DISPUTA DE SENTIDO

Los medios oficiales intentaron cercar el sentido del 21 de enero en un golpe de Estado fallido, los indios manipulados por los militares, aunque luego todo se redujo al desorden del coronelazo, pues, desde la lógica de la sucesión constitucional, tejieron *a posteriori* la historia de la estrategia de los generales para defender la democracia. Mendoza fue condecorado por sus servicios a la democracia.

Con este discurso pretenden retrotraer el tema de la política a las preguntas de los setenta y ochenta: dictadura vs. democracia, autoritarismo vs. democracia, para eludir el tema que estaba en juego: la crisis política y el poder, el carácter de la democracia.

El objetivo es silenciar el significado de la insurrección. Quizás ni los propios actores tenían “plena conciencia de que su lucha contra la corrupta bancocracia y el gobierno nacional era mucho más que eso: que no estaban promoviendo un mero acontecimiento local ecuatoriano, sino que llenaban con su puño y letra una página en el libro de la historia mundial. Que, para decirlo de una vez, se había convertido en asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos”¹⁴

Los pueblos indígenas y los movimientos sociales buscaron la legitimidad en la “soberanía popular”, y han interpretado el 21 de enero como un momento de quiebre del sistema político y de constitución de un doble poder, como un paso para construir un gobierno alternativo.

“Viernes negro, comedia bufa, pesadilla monstruosa, jornada trágica, golpismo, atentado contra la democracia. Así fue descrita por la prensa la rebelión popular que, el 21 de enero de 2000, derrocó a Jamil Mahuad y reclamó para sí la conducción del Estado ecuatoriano.”¹⁵

Los actores sociales intentaron un hilo interpretativo diferente, desde las versiones de la democracia participativa y la soberanía residente en el pueblo, hasta las estrategias insurreccionales que logran cercar al poder constituido en la materialidad de sus instituciones y construir temporalmente nuevas instituciones de un poder diferente.

¹⁴ DIETERICH (2000: 10)

¹⁵ CORDOVA (2003: 7 - 8)

Aunque luego de la derrota, también en las filas sociales regresaron los viejos fantasmas del temor a su propia obra a través de las interpretaciones de la conspiración. También algunos voceros sociales, desde la mirada interpuesta del poder constituido, quieren ver el “poder tras los ponchos”.

Nuevamente se enfrentan dos visiones normativas de la democracia. Con toda razón, Vladimiro Álvarez, para sus momentos de análisis teórico, recurre a las teorías minimalistas y procedimentalistas: “la característica fundamental de un régimen democrático ... (está), sobre todo ... (en) la existencia real de un Estado de Derecho. A su vez, la esencia de un Estado de DERECHO se asienta en la vigencia permanente, absoluta e ininterrumpida de toda la estructura constitucional y jurídica que un conocido jurista, Hans Kelsen, llamó la “pirámide jurídica”. Así, pues, todo régimen democrático para que sea tal requiere de la aplicación y respeto, por parte de gobernantes y gobernados, de las normas de la Constitución, de las leyes secundarias y de otras reglas que conforman el sistema jurídico nacional”¹⁶

Simple, la democracia se reduce al cumplimiento de la norma, la esencia de la democracia está en el cumplimiento de la Constitución y las leyes: democracia y constitucionalismo son lo mismo, ya lo proclamó Locke: “esos son conceptos básicos, elementales, del Derecho”¹⁷ Ante esta evidencia el razonamiento es categórico: si el 21 no se cumplió la Constitución, estamos ante un golpe; aunque como concluyó en el restablecimiento del orden democrático, se trata de un “golpe constitucional”.

Los militares que estaban detrás de los ponchos dieron un paso adelante, dejaron de estar detrás, ahora estaban delante de los ponchos, después de desplazar a la Junta de Salvación Nacional por un Triunvirato presidido por el Comandante de las FF.AA., ya podían cumplir el rito final de la sucesión constitucional.¹⁸

Desde esta visión desaparece de la vista el problema molesto de la legitimidad, la relación de la política con la ética, de la política con la economía, el juego de los intereses, el origen de las leyes. En el campo aséptico de la ley, el mal está en los otros, en los subversivos.

Desde la visión minimalista manejada por el pensamiento político único, ni siquiera es posible avanzar dentro de las concepciones liberales a la diferenciación realizada por Bobbio entre Estado de derecho, centrado en el control del poder; y democracia, orientada a la distribución del poder. La irrupción de nuevos actores sociales sólo puede ser controlada desde la reedición de nuevas formas de autoritarismo: el hiperpresidencialismo puede empezar por formas débiles de concentración de atribuciones en el Ejecutivo.

Aún menos, es posible reconocer el papel de la desobediencia civil, como mecanismo democrático de ampliación del Estado de derecho en situaciones de crisis política caracterizada por la distancia entre legalidad y legitimidad, como propone Habermas desde una visión de democracia comunicativa en los Estados de derecho consolidados.

Y aún más, para el pensamiento liberal subyacente a las retóricas tanto de los grandes medios como los textos oficiales, “el derecho de los pueblos (incluido el del Ecuador) a su autodeterminación y a liberarse de los sistemas opresivos”, reconocido por la

¹⁶ ÁLVAREZ (2001: 133-134)

¹⁷ ÁLVAREZ (2001: 135)

¹⁸ ÁLVAREZ (2001: 135)

Constitución (Artículo 4), es apenas una declaración formal. Inmediatamente sale el argumento de la pirámide jurídica invertida: para ejecutar la disposición constitucional hace falta la ley correspondiente.

La gobernabilidad opera a través de un mecanismo sistémico: el distanciamiento entre las decisiones y los actores, el vaciamiento del contenido material de la democracia, la participación ciudadana en las decisiones de la *res pública*. La retórica de la opinión pública controlada desde el orden, juega un papel central en este funcionamiento. Aunque la opinión pública es también el espacio de disputa de otros sentidos.

El orden constituido es la norma suprema, no importa que para ello haya que forzar un poco la Constitución, sobre todo en el momento del desenlace: ante las incesantes llamadas de las fuerzas del orden, “de funcionarios del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, y la reacción de los medios de comunicación del Ecuador y de algunos dirigentes políticos, y del llamado generalizado a la sensatez y respeto democrático, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Consejo de Generales resolvió disponer **que se llame al Vicepresidente de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, para que asuma la Presidencia**, habiendo tomado inmediatamente posesión del cargo ante el mencionado Comando Conjunto. Con este acto *distinto* al procedimiento establecido en la Carta Magna, pero *necesario en este momento*, se restableció el sistema democrático, luego de haber sido roto por un sorprendente golpe constitucional”¹⁹

Un pequeño reajuste al procedimiento no altera el resultado, siempre que éste sea el restablecimiento del orden; ya habrá tiempo para que el Congreso legalice a posteriori lo actuado: el tutelaje militar y las llamadas incesantes del poder americano han cumplido su objetivo, el sistema democrático se ha restablecido.

El principio diferente, *vox populi vox dei*, está fuera de este horizonte, “es un principio democrático que sustenta el sistema partiendo de la soberanía popular, no tiene, sin embargo, fuerza jurídica, sino cuando esa voz, la voz del pueblo se emite en los casos y cumpliendo los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes”. Marchas, levantamientos, opiniones, reportajes, “mil y una expresiones que pudieran darse para hablar a nombre del pueblo, no constituyen formas jurídicamente válidas para imponer propuestas, aunque sí deban ser recogidas pluralista y democráticamente por las autoridades como criterios respetables de sus autores a ser tomadas en cuenta entre los distintos elementos de análisis para adoptar decisiones... Jurídicamente eso no cuenta. Políticamente sí.”²⁰

La *vox populi* queda reducida a un criterio más que debe ser analizado por la autoridad. Otra vez, Locke y Rousseau; aunque también habrá que reconocer la originalidad de los procesos latinoamericanos: el paso de la desobediencia civil al derecho a la insurrección; el intento de un poder constituyente radical, o al menos su retórica.

EL DETONANTE, LA CORRUPCIÓN

La lucha contra la corrupción se ha convertido en el espacio de tratamiento de las contradicciones dentro del bloque dominante, el espacio de las crisis palaciegas.

¹⁹ ÁLVAREZ (2001: 147 - 148). Cursivas son mías.

²⁰ ÁLVAREZ (2001: 135 - 136)

La retórica oficial durante la primera fase del Gobierno de Mahuad, había logrado regular los dos problemas críticos al orden del día: el tema limítrofe y la crisis financiera. El mecanismo sistémico de la gobernabilidad pudo operar en estos casos; por los barrotes de la “jaula de hierro” apenas escaparon algunas voces de descontento.

El problema limítrofe fue desarmado: de espacio de conflicto para sostener la unidad nacional, fue convertido en escenario de la primera armonía para consolidar la legitimidad del régimen golpeada por las dudas del origen y por las reacciones al primer paquetazo económico. Las voces disidentes, sobre todo desde las filas castrenses, fueron silenciadas, aunque luego volverían bajo forma de rebelión.

La crisis bancaria fue convertida en la salvación de los depositantes; los dueños de los bancos hicieron mutis por el foro. Los procesos de acumulación se desplazaron de los bancos quebrados a los bancos fuertes y a los circuitos del capital externo.

Ahora el problema era de todos: “Alrededor de la crisis financiera, la prensa distribuyó una información cuyo eje central fue el fantasma de la desestabilización. El temor al cambio cobró fuerza y, frente al miedo, se levantó la promesa presidencial de encontrar una salida que restableciera la certeza. Inscribiéndose en esta orientación gubernamental, el entorno mediático difundió masivamente la directriz de que “todos debemos poner el hombro”, porque “la Patria es sólo una”. Así se emprendió el camino que llevaría a aceptar resoluciones impuestas, aunque consensuadamente leídas.”²¹

Como decía el Presidente Mahuad, “aquí lo que estamos resolviendo no es si tenemos o no un presupuesto balanceado, aquí lo que estamos resolviendo es si vamos a tener o no un sistema bancario nacional saneado.”²² Planteado así el problema, todo sacrificio es necesario, especialmente si es con los dineros públicos o con los depósitos de los pequeños y medianos ahorristas.

Las voces disidentes emergieron desde abajo; el levantamiento de marzo del 99 recogió el descontento ya no sólo contra el “paquetazo” tradicional, sino contra el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos en el sistema bancario privado. Empero la reacción de los ahorristas fue más bien limitada, a diferencia de la reacción masiva que se presentó en Argentina contra el “corralito” en una crisis similar en diciembre de 2001.

La tabla de salvación para el capital llegó con la dolarización implantada el 9 de enero del 2000. El ablandamiento mediático también había llegado a su punto más alto: “la noción de crisis económica ingresó a tal grado de lo aporreado que, cuando Mahuad planteó la dolarización, la prensa lo asumió como un elemento que recualificaba la política económica del país”²³, y volvía a reconocer la añorada calidad de estadista del Presidente. El Comercio podía reconocer que Mahuad había logrado “reoxigenarse y ganar tiempo, una vez que su situación política era complicada.”²⁴ Aunque ya era tarde.

El detonante de la crisis de legitimidad vino desde la ruptura del implícito pacto de silencio que funciona en la cadena de la corrupción: el punto de partida estuvo en

²¹ CÓRDOVA (2003: 26)

²² EL TELÉGRAFO, 16-04-99, citado en CÓRDOVA (2001: 26)

²³ CÓRDOVA (2003: 27)

²⁴ EL COMERCIO 16-01-2000

octubre del 99, cuando Aspiazu, en represalia al apresamiento realizado por los militares y al juicio tardío por peculado, denuncia el manejo del financiamiento de la campaña presidencial por los banqueros; más allá del problema jurídico, mostró a un Presidente atrapado en los resortes del poder.

“Las dos crisis anteriores – el problema limítrofe con el Perú y el congelamiento bancario – no afectaron a Mahuad en su condición de representante del poder, la tercera sí lo hizo. El mandatario solo podía superar la denuncia de Aspiazu a condición de revertir el enjuiciamiento a su moral, hacia la naturaleza del control financiero privado sobre el Estado, lo cual suponía cuestionar las razones del congelamiento bancario.”²⁵

En el capitalismo tardío se ha producido un juego sistémico que coloca la moral en el campo de lo privado, dejando lo jurídico al campo de lo público. Al desplazar la denuncia de lo político a lo moral, el bloque dominante puede individualizar las responsabilidades y tratar sus contradicciones internas sin afectar las bases del sistema: el problema es del individuo implicado, no del sistema y ni siquiera de la institución. Con ello, si bien “la lucha contra la corrupción es la lucha contra el poder; pero éste logra finalmente encauzar esa lucha”²⁶

El método ha funcionado en problemas similares, como en el caso del impeachment de Collor de Melo: después de una larga batalla, el desenlace estuvo en un recambio de personaje, para evitar el peligro del triunfo de Lula. “El recambio final se opera en un cambio de figura: Collor por Cardoso, a fin de garantizar la continuidad del modelo. (...) La lucha política contra la corrupción ha cumplido su propósito: permitió conjurar el peligro petista y ganar tiempo para un recambio político en el bloque dominante. (...) Jugó el papel de una catarsis colectiva y luego vuelve el viejo tiempo del olvido.”²⁷

La lucha contra la corrupción se mueve en un primer nivel de los déficit de hegemonía: en el marco de las contradicciones dentro del bloque dominante; y a través de la retórica de los medios que guían los temas, los ritmos y los alcances, funciona un corte para evitar el paso hacia una crisis de hegemonía de segundo nivel: la pérdida de legitimidad del sistema ante la sociedad.

Empero, en medio de una crisis política en marcha, las denuncias de corrupción pueden constituirse en el detonante del desenlace. La denuncia de Aspiazu revela la profunda ruptura entre los dos polos de representación articulados al capital financiero de Quito y Guayaquil.

La brecha se profundizará en el tratamiento de la pro forma presupuestaria para el 2000. Ante la imposibilidad de un acuerdo con el PSC, el Gobierno acude a un pacto con el Partido Roldosista. “Al aliarse con un elemento satanizado, Mahuad asumió el estigma para sí.”²⁸ Todo entraba en sospecha, se iniciaba la retórica de la traición.

²⁵ CÓRDOVA (2003: 31)

²⁶ SALTOS (1999: 69)

²⁷ SALTOS (1999: 70)

²⁸ CÓRDOVA (2003: 39)

LA TRAYECTORIA, LOS ACTORES, LAS ESTRATEGIAS.

Ensimismados en estos juegos de escena, para las visiones oficiales, el 21 de enero es un rayo en cielo sereno, un “golpe” de Estado (Diario *Hoy*) o una “vorágine” desestabilizadora (Diario *El Comercio*).

Empero los acontecimientos del 21 sólo pueden ser entendidos, de un lado, como el punto culminante de una trayectoria política construida por los actores en un período prolongado de crisis; y de otro, como la fuerza sistémica de la “democracia liberal” y el poder del imperio para controlar los peligros de la insubordinación.

Diferenciamos cinco tiempos: la gloria y la legitimidad del poder constituido en torno a la figura de Mahuad y la alianza de la DP y el PSC. La ruptura de la alianza dominante ante el estallido de la crisis bancaria. La irrupción de un tercero en discordia, un nuevo bloque histórico encabezado por el movimiento indígena, con la participación de los movimientos sociales: presencia tardía del escenario “movimientista”. El ejercicio temporal – una “comuna efímera” - y la derrota del poder constituyente del nuevo bloque histórico. La reconstitución sistémica del poder constitucional.

La crisis económica del 98 y 99, es la primera crisis de la nueva fase financiera del capital. La rebelión del 21 de enero del 2000 es la última desde mecanismos de presión en los circuitos de producción y mercado, dentro del marco del Estado nacional. Pero abre la puerta a la posibilidad de un nuevo período estratégico en las luchas populares.

En torno al 21 de enero, se juegan tres estrategias principales: la estrategia de la insurrección popular, construida por los movimientos sociales y el movimiento indígena y respaldada por los mandos medios del Ejército; la estrategia del golpe militar, elaborada por la cúpula militar; la estrategia del recambio constitucional, secretada por el sistema del poder constituido. Al final, triunfa, sin rostro definido, la estrategia “sistémica”: el heredero es el Vicepresidente Gustavo Noboa, posesionado en los salones del Ministerio de Defensa, ante un grupo de generales.

LA ESTRATEGIA INSURRECCIONAL: EL DOBLE PODER

El punto más alto de la estrategia insurreccional no estuvo en el 21 de enero, sino en el 11 de enero, la constitución de los Parlamentos de los Pueblos, como un poder paralelo, el germen de una especie de “Comuna de Quito”²⁹. “El 11 de enero del 2000 cambió el mapa político del Ecuador... Después de veinte años de control de la democracia por los grupos de poder y los políticos tradicionales, los pueblos indígenas, los movimientos sociales y algunas organizaciones de profesionales y universidades, habían logrado concretar una antigua utopía: construir un espacio de poder contrahegemónico. No se trataba de asaltar el poder, sino de condensar un larga construcción de poder desde abajo, para que ahora se exprese en la conducción del país.”³⁰

Esta visión de un poder paralelo, un poder constituyente, es asumida explícitamente por el Parlamento: la primera resolución es *“Instalar el Parlamento de los Pueblos del Ecuador como instancia de democracia y representación plurinacional, legítimo y soberano: el Parlamento de los Pueblos del Ecuador es un órgano permanente de*

²⁹ MOREANO en VARIOS (2001)

³⁰ SALTOS, en VARIOS (2001: 19)

decisión y resolución. Asume la preparación de la transición del NUEVO GOBIERNO.”

Esta visión se destaca también en el Artículo 1º del Estatuto: “*Art. 1.- El Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador es un órgano permanente y un espacio abierto de ejercicio directo de la SOBERANÍA POPULAR, en la cual radica su autoridad legislativa, ejecutiva, judicial y de control.*”

Esta propuesta de “ejercicio directo de la soberanía popular”, modifica la visión liberal de la democracia, centrada en la representación. Este debiera ser un punto central del debate; aunque el pensamiento político único cierra el camino a la reflexión y califica como “demagogos”³¹ o como “delincuentes”³² a quienes defiende el principio de la soberanía popular.

“En el 21 de enero confluyen procesos que vienen desde atrás. No se trata de un push. Allí se condensa el largo proceso de maduración del movimiento indígena, la presencia de los movimientos sociales y la opción ética y nacionalista de los militares jóvenes. Aquello era, sin duda, una revolución... El 21 de enero quedará en la memoria social bajo la imagen de indios y militares insurgentes que levantan juntos sus manos. Una suerte de efímera comuna de Quito, que duró tres o cuatro horas, pero que no será olvidada jamás”³³

Aquí se expresa un proceso de aprendizaje después de la experiencia del 5 y 6 de febrero del 97, en la caída de Bucaram: no volver al desenlace parlamentario pues el funcionamiento del sistema garantiza un recambio de nombres, sin modificar el modelo. El objetivo central de la estrategia insurreccional es crear un espacio diferente de decisión, un poder que sustituya no sólo al Presidente, sino también al Congreso.

El Mandato empieza por ubicar el problema, ya no en el cambio de nombres, sino en el fracaso del modelo: “*el actual modelo económico y político aplicado por los gobiernos en estos últimos veinte años, ha sembrado pobreza, inseguridad, angustia y desmoralización en los hogares de la ciudad y el campo.*”

Por ello plantea el objetivo de una refundación de la República, sobre la base de un nuevo poder a partir de la redefinición de la democracia:

“la democracia debe regresar a su fuente: la SOBERANÍA POPULAR. Esto significa un cambio de rumbo: construir una NUEVA DEMOCRACIA, una NUEVA ECONOMÍA, una NUEVA ETICA y una NUEVA ADMINISTRACION. Es la hora de UN PROGRAMA ALTERNATIVO, que reactive la producción, reduzca la inflación favoreciendo la inversión en desarrollo humano, rescate la democracia para los pueblos, moralice la nación y construya la unidad latinoamericana para participar en el nuevo orden mundial. Queremos TRANSFORMACIONES PROFUNDAS que aseguren PAN CON DIGNIDAD para todos los ecuatorianos.”

³¹ ÁLVAREZ (2001: 137 – 138)

³² ÁLVAREZ (2001: 38)

³³ VARIOS (2001: 7)

Aquí está el punto clave de la ruptura: se trata de un nuevo poder. El Parlamento de los Pueblos resuelve “*en uso del poder conferido por la soberanía popular y en ejercicio de la auténtica democracia*”:

1. *“Convocar a los pueblos del Ecuador a LEVANTAMIENTO GENERAL para revocar el mandato del Gobierno presidido por el Dr. Jamil Mahuad y del Congreso Nacional, y la disolución de la Corte Suprema de Justicia, a fin de dar paso a la AUTENTICA DEMOCRACIA de los pueblos del Ecuador, que represente a los indios, negros y mestizos, a las mujeres y hombres trabajadores, a los patriotas civiles y militares, a los cristianos y creyentes comprometidos, a los empresarios honestos, a las diversas regiones y provincias del país, todos los que no somos responsables de la destrucción de la patria ni tenemos las manos manchadas con la corrupción.*
2. *EL PARLAMENTO DE LOS PUEBLOS DEL ECUADOR ASUME PLENOS PODERES PARA DECIDIR EL NUEVO RUMBO ECONOMICO, POLITICO, ADMINISTRATIVO Y MORAL DE LA PATRIA. Somos los herederos de la historia de dignidad del Ecuador, continuamos el camino abierto por Rumiñahui, Espejo, Illescas, Bolívar, Manuela Sáenz, Montalvo, Daquilema, Alfaro, Vargas Torres, Carlos Concha, Alberto Enríquez Gallo, Mardoqueo León, Dolores Cacuango, Leonidas Proaño y demás mártires y dirigentes populares.*
3. *Constituir la NUEVA REPUBLICA DE LOS PUEBLOS DEL ECUADOR”*

Efectivamente, como señala DÁVALOS (2001), hay un desplazamiento del discurso indígena, no sólo desde la retórica institucionalista de la ciudadanía y la identidad predominante en tiempos de la Asamblea Constitucional del 98, sino también respecto al discurso del Estado plurinacional de los primeros levantamientos. Ahora se erige un discurso programático que engloba el conjunto del poder, la construcción y la dirección, la sociedad, la nación y el Estado.

Este desplazamiento se realiza ya no sólo como un proceso endógeno al movimiento indígena, sino como un punto de encuentro con otras corrientes críticas, provenientes desde el pensamiento político, desde las visiones de otros movimientos sociales y de otras concepciones influidas por el marxismo, el cristianismo comprometido y las experiencias liberadoras latinoamericanas.

El centro del discurso está en la disputa del carácter de la democracia desde un nuevo poder basado en la soberanía popular; el objetivo es rescatar la democracia capturada por los banqueros y los poderes constituidos. Esto significaba atentar contra el corazón de la legitimidad; por ello la fuerte reacción de la retórica oficial: “Viernes negro, comedia bufa, pesadilla monstruosa, jornada trágica, golpismo, atentado contra la democracia.”

Un imagen creada por la retórica oficial es que la insurrección no tenía un programa alternativo. Sin embargo, en este Mandato se recoge las líneas de una visión construida en medio de las luchas sociales e indígenas durante una década de luchas. En esta imagen de la ausencia de un programa confluye un doble juego: de un lado, el orden del

poder constituido para invisibilizar los poderes constituyentes; y de otro, el retraso teórico de las fuerzas insurgentes para presentar sus propuestas.

El Mandato se presenta como un programa de transición: desmontar el poder de los banqueros y crear un nuevo poder en torno a una alianza social-productiva. La rebelión del 21 de enero es la última rebelión en el marco del Estado nacional.

El Mandato coloca como primer objetivo el combate a la corrupción: *Extirpar totalmente la corrupción y la impunidad en el sector público y privado*. Esto muestra en gran parte el carácter de la rebelión: el elemento ético y moral es el punto de confluencia de los diferentes actores. Particularmente la participación de los mandos medios militares se da más desde esta dinámica, que desde una visión de programa político y económico.

El programa económico se orienta hacia la construcción de una NUEVA ECONOMÍA, basada en el “*impulso de una economía mixta de mercado solidario, en la que participen: la iniciativa privada con responsabilidad social, ética y ambiental; un Estado fuerte, eficiente y moderno, para garantizar el control de la economía tanto a través de mecanismos jurídicos y de empresas públicas capaces de competir eficientemente en el mercado; y la economía popular, en sus diferentes formas, desde la microempresa y la artesanía, hasta la empresa comunitaria.*”

La visión económica parte de la consolidación del mercado interno como plataforma de incorporación al mercado mundial y de la reorientación de la economía desde la lógica del capital bancario y financiero hacia la lógica del capital productivo. La línea es más antineoliberal que anticapitalista. El tratamiento de la deuda externa como un problema subordinado a la reactivación productiva y al desarrollo social abre nuevas perspectivas en la relación con el capital financiero internacional.

El contenido social rompe con las visiones asistencialistas y las líneas de focalización del programa neoliberal. Coloca en el centro dos elementos, la dignidad y la recuperación del papel del trabajo: *pan con dignidad, empleo y salud para todos*.

El objetivo político es la construcción de una NUEVA DEMOCRACIA y una reforma profunda del Estado: *instauración de un Estado plurinacional, unitario, democrático, descentralizado, transparente y equitativo*. La base de la nueva democracia está en la constitución de nuevos órganos de poder, basados en el poder del pueblo: *instauración de una Junta de Gobierno, un Consejo de Estado y Parlamentos seccionales y nacional que sean la expresión y representación de los pueblos, sectores sociales, regiones y provincias del país*.

La soberanía y unidad nacional y la unidad latinoamericana y política internacional soberana, son objetivos claves de este mandato. De un lado, se plantea enfrentar las posiciones disolventes desde adentro, particularmente los proyectos autonomistas de la oligarquía guayaquileña; y de otro, crear condiciones para una integración diferente desde la unidad latinoamericana. La política de paz y autodeterminación de los pueblos se coloca en el centro del tratamiento de los problemas internacionales, en particular el Plan Colombia.

Durante el período el pensamiento único estos planteamientos podían parecer insuficientes, o como argumentaba la retórica oficial, un regreso al pasado. Sin embargo, en el momento actual, cuando el proyecto neoliberal ha empezado a sufrir asedios no sólo desde la oposición, sino desde los voceros internos, estos lineamientos empiezan a presentarse como salidas viables.

Este Mandato fue analizado, durante la preparación de la insurrección, tanto con el equipo de los Generales, como con los capitanes y coroneles. El día 21 de enero, el Decreto N° 1, proclama la Junta de Gobierno y el Mandato. Sin embargo este proceso se corta cuando hay un desplazamiento hacia la integración de Mendoza: en el momento de la posesión de la nueva Junta no hay una voz que pueda recoger el largo proceso construidos por los pueblos indígenas y los movimientos sociales.

No hay programa sin sujeto. El programa formulado embrionariamente muestra el carácter de la fuerza, del bloque histórico en constitución. No se trata de un programa étnico, como se pretende en las versiones oficiales, interesadas en la visibilización unilateral de lo indígenas. Hay más bien una confluencia de tres vertientes centrales: las propuestas indígenas en torno al Estado plurinacional; las propuestas de los movimientos sociales en torno a un programa antineoliberal de defensa del patrimonio público, reactivación productiva y recuperación del papel del trabajo; las propuestas militares en torno a la defensa de la soberanía nacional. El cordón umbilical que fusionó estas visiones fue la lucha contra la corrupción y contra las viejas élites políticas.

El discurso se orienta a un cambio profundo, a la refundación de la República. A pesar de la derrota ese imaginario queda sembrado en la visión de los actores sociales.

Quizás lo que sucumbía no era la insurrección, sino sus formas de aprendizaje; podemos evocar el discurso de Marx: “el progreso revolucionario no se abrió paso con sus conquistas directas tragicómicas, sino, por el contrario, engendrando una contrarrevolución cerrada y potente, engendrando un adversario, en la lucha contra el cual el partido de la subversión maduró, convirtiéndose en un partido verdaderamente revolucionario”.³⁴ El vacío decisivo para las fuerzas insurgentes fue la carencia de un partido que dirija el proceso; todavía se basó en instrumentos de masas, en estructuras de movimiento.

La trayectoria de la insurrección popular: el aprendizaje.

La trayectoria de la insurrección popular del 21 de enero del 2000 viene desde atrás. Confluyen tres procesos: la constitución del movimiento indígena como actor político nacional; la participación de los movimientos sociales, en particular, del movimiento sindical público politizado; y la presencia de una corriente profesional y de compromiso social de los mandos medios del Ejército. No se trata de una acumulación gradual; sino más bien de una confluencia: procesos paralelos que terminan compartiendo el espacio de un acontecimiento. Este es un primer elemento para desmentir la tesis del push. No hay un sujeto con capacidad teleológica, sino un sujeto o más bien diversos sujetos que se constituyen en el proceso.

³⁴ MARX (1973: 39)

El movimiento indígena emerge como actor social étnico en el levantamiento del 90; y luego en 1996, con la organización del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, en alianza con los movimientos sociales, se presenta como un actor político-nacional. “Hasta comienzos de los 90, el movimiento indio se movía en el horizonte de sus reivindicaciones propias y de su afirmación étnico-cultural, es decir, hacia adentro. Sin embargo, en los últimos años, en especial desde la formación de Pachakutik, el movimiento indio se ha convertido en una fuerza política nacional que ha mantenido en jaque al poder y al neoliberalismo, protagonizando las movilizaciones más significativas de la vida nacional y, en torno al 21 de enero, convertido en el eje de un nuevo bloque histórico y en una alternativa real de poder.”³⁵

Los movimientos sociales logran niveles de coordinación política desde el eje del sector público, sobre todo en la resistencia a las privatizaciones. En 1995 se constituye la Coordinadora de Movimientos Sociales que encabeza la lucha contra el Plebiscito de Sixto Durán, participa en la constitución del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik en 1996, y encabeza la primera fase del derrocamiento de Bucaram en febrero del 97.

En la Guerra del Cenepa, en 1995, se constituye dentro del ejército la corriente de los “Héroes del Cenepa”, en la que confluyen la “generación ilustrada”³⁶, surgida después de la derrota de Paquisha, con los mandos medios formados en el compromiso social. Se trata de un actor con su propio proceso; no es una corriente orgánica, sino más bien una visión sobre la misión militar, marcada por concepciones profesionalistas y éticas, de defensa de la soberanía y la dignidad nacional.

De modo que para la crisis económico-política durante el período de Mahuad hay una fuerza social-política constituida que actúa en los diversos escenarios, tanto dentro de la institucionalidad, desde el Parlamento, como desde la movilización social; y hay una corriente que actúa dentro de las Fuerzas Armadas en una línea de distanciamiento del poder oligárquico. Esta es la diferencia clave con el proceso de Perú.

En octubre de 1998 se realiza tempranamente la primera movilización general contra Mahuad, para rechazar el “paquete económico” (alza de combustibles, gas y tarifas de servicios básicos y devaluación del sucre) y las negociaciones “entreguistas” con el Perú. La convocatoria fue básicamente de los movimientos sociales y laborales; el movimiento indígena no interviene masivamente.

El levantamiento indígena-popular de marzo del 99, contra el feriado bancario y el anuncio de nuevas medidas económicas, parte “el 10 de marzo (en que) se inició un paro general de 48 horas convocado por organizaciones sociales y el movimiento indígena y apoyado por partidos políticos de oposición. La Coordinadora de Movimientos Sociales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los partidos de izquierda y centroizquierda convocaron a un Congreso del Pueblo que el jueves 11 reunió a 3.000 personas.”³⁷

³⁵ MOREANO (2001: 176)

³⁶ LASCANO (2001: 24)

³⁷ LUCAS (2000: 20)

La realización del Congreso de los Pueblos, en medio de las acciones de movilización, marca un punto de inflexión en el aprendizaje del movimiento indígena y los movimientos sociales: ya no se trata sólo de una lucha de resistencia, ahora “el Congreso realizó una propuesta, para salir de la crisis económica. En lo fiscal planteó restituir el impuesto a la renta; eliminar la exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), excepto medicamentos; crear un impuesto progresivo a los vehículos privados de lujo, aviones y yates particulares. También promovió la eliminación de exenciones aduaneras, racionalizar el gasto público y suspender temporalmente el servicio de la deuda externa.”³⁸

Sin embargo, el Presidente Mahuad, en lugar de abrir un espacio de diálogo, en la noche del jueves 11 de marzo, promulgó las medidas económicas: congelamiento de los depósitos en el sistema financiero, elevación del precio de los combustibles en el 160%, proyectos de Ley para elevar el IVA del 10 al 12% y para acelerar las privatizaciones, auditorías internacionales al sistema financiero.

El bloque dominante estaba acostumbrado a enfrentar luchas urbanas, encabezadas por el movimiento sindical, que no podían extenderse más allá de 48 horas. Todavía no existía un reconocimiento del poder de los pueblos indígenas: al no depender del régimen laboral podían extender la lucha por tiempo indefinido; al controlar el 60% de la producción para la canasta familiar y al estar colocados a lo largo de la principal vía de transporte podían imponer un cerco desde el campo a la ciudad.

Empero esta fuerza, junto al apoyo de los movimientos sociales, en particular del sindicalismo público, todavía actuaba desde mecanismos de presión en los circuitos de producción y circulación, sin lograr afectar las líneas de la reproducción ampliada del capital financiero.

Mahuad analiza la posibilidad de un autogolpe; de acuerdo al testimonio del entonces Ministro de Gobierno, la propuesta habría salido del Frente Militar y, en particular del Comandante de las Fuerzas Armadas, General Carlos Mendoza y del Comandante del Ejército, General Telmo Sandoval. El nacionalismo no tiene definición propia, está marcado por el ordenamiento y la correlación de fuerzas políticas que actúan en la sociedad. Los mismos generales que ahora recomiendan “agradecer los servicios a los señores diputados”, mañana buscarán un acuerdo con el movimiento indígena para derrocar a Mahuad.

La crisis política del bloque dominante impide contar con un respaldo ni de las fuerzas políticas, ni de la Embajada Americana: “El Embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Leslie Alexander también dijo a Mahuad que su gobierno no apoyaría ninguna salida dictatorial y lo instó a que negocie con la oposición para salir de la crisis”.³⁹ El muro de contención viene desde el poder externo: la vigencia de la democracia no es un asunto del Estado de derecho, sobre todo en momento de crisis, es el resultado de los juegos del poder.

En esta oportunidad intervienen también los taxistas y los choferes de transporte pesado y de buses interprovinciales: “El lunes 15 de marzo de 1999 el país amaneció

³⁸ LUCAS (2000: 21)

³⁹ LUCAS (2000: 25)

estupefacto al ver todas sus principales carreteras interprovinciales y vías urbanas bloqueadas por miles de taxis estacionados en las intersecciones de mayor tráfico”⁴⁰.

Las movilizaciones se extienden a lo largo del país: se movilizan los barrios del Sur de Quito; en Guayaquil los moradores de los barrios periféricos “resistieron la intervención de la policía y del ejército y saquearon comercios”; en Cuenca, “más de 30 mil personas marcharon por las calles con pancartas exigiendo la eliminación del paquete de ajuste y la destitución de Mahuad”⁴¹

El levantamiento se consolida el 17 de marzo con la participación masiva de los indígenas. Esta presencia modifica los antiguos esquemas de luchas populares y quiebra la resistencia del Gobierno: el 18 en la noche, Mahuad da marcha atrás y anuncia la eliminación del estado de emergencia, la revisión del precio de los combustibles a la baja y el retiro de los proyectos de ley. Al día siguiente recibe a los delegados de los indígenas y los movimientos sociales para sellar el acuerdo.

Los transportistas levantan el paro cuando Mahuad anuncia la revisión del precio de los combustibles: estaba cumplido su interés. Los pueblos indígenas se mantienen movilizados hasta lograr una ratificación de los acuerdos por el Congreso Nacional: asumen una representación general.

En este levantamiento hay un aprendizaje del movimiento indígena y de los movimientos sociales, que será fortalecido en julio y aplicado en la insurrección del 21 de enero. Han comprobado los alcances de su poder; y han podido reconocer las estrategias del poder constituido.

El movimiento indígena pasa a constituirse en el actor hegemónico del bloque popular: hay un aprendizaje político acelerado. “En esta coyuntura la CONAIE puede pensarse a sí misma como la representación no formal de la soberanía popular... Los levantamientos de 1999 transforman políticamente a la CONAIE en el sentido en que la configuran como espacio de representación política informal, que goza de legitimidad y credibilidad social, y que ... puede reclamar para sí una representación política paralela dentro de la institucionalidad vigente”.⁴² Este cambio exigía una redefinición del proyecto original, de las estrategias y los tiempos. Pero este paso no se realiza y se opera una fractura entre los intentos de proyectar el nuevo poder hacia una salida insurreccional; y la persistencia de visiones institucionalistas.

Fue posible modificar algunas medidas, como el alza de combustibles, pero el proyecto de fondo del salvataje bancario seguía adelante, sobre todo con el congelamiento de los depósitos en el sistema financiero privado. El cerco al poder se realizó a través de presiones en el circuito productivo y de ataques a la legitimidad del régimen. El poder de los sectores financieros puede rebasar este tipo de cercos y radicalizar su línea de salvataje bancario.

Ante el debilitamiento de los partidos tradicionales, las cámaras empresariales asumen su propia representación. No sólo del lado popular hay un ejercicio directo el poder y la representación. En forma paralela, el 12 de marzo, las Cámaras de Guayaquil realizan

⁴⁰ ÁLVAREZ (2001: 73)

⁴¹ LUCAS (2000: 25 – 26)

⁴² DÁVALOS (2001: 126)

una marcha encabezada por el Alcalde León Febres Cordero, y “algunos de los más representativos dirigentes empresariales de Guayaquil”, en apoyo al Banco del Progreso de Aspiazu. Exigen la entrega de fondos públicos para salvar a la banca quebrada. “El Gobierno Nacional, ante los levantamientos que se produjeron en Guayaquil por el cierre del Banco del Progreso resuelto por Fernando Aspiazu, decidió, de acuerdo con la Ley, darle oportunidad de que se capitalizara en un plazo determinado”. Este anuncio tranquilizó a Febres Cordero y a las Cámaras.⁴³

A pesar de la respuesta favorable de Mahuad, la oligarquía guayaquileña realiza, el 12 de abril, la “Marcha de los crespones negros”. El discurso neoliberal de la reducción del Estado desaparece cuando se trata de auxiliar a los bancos quebrados; pero el objetivo va en dirección de la profundización de la liberalización de la economía. Una oligarquía rentista, que ha vivido tradicionalmente del apoyo del Estado, en sucesivas sucretizaciones de la deuda externa, condonaciones de deudas a los bancos públicos, en particular al Banco de Fomento, y ahora salvatajes bancarios.

Desconociendo los compromisos asumidos con los indígenas y los movimientos sociales, Mahuad insiste nuevamente en la misma salida a la crisis. En mayo vuelve a plantear un nuevo paquete económico y a presentar una “Ley marco”, orientada a la privatización de los recursos públicos, a la liberalización de la economía y a la entrega de nuevas atribuciones discrecionales al Presidente de la República. Una y otra vez, ya sea por el lado de los intentos de autogolpe o por la vía de las reformas legales, se busca salidas autoritarias para enfrentar la crisis. El 5 de julio, ante los anuncios de nuevas movilizaciones, el Gobierno decreta el Estado de emergencia.

Nuevamente en las acciones de julio del 99, el detonante fue el paro de los taxistas, iniciado el 5 de julio en contra del aumento de combustibles. Luego el movimiento indígena realiza levantamientos sobre todo en las provincias del centro, Cotopaxi y Tungurahua, y marchan sobre Quito. “La reacción social fue contundente y las ciudades más importantes fueron paralizadas por la falta de transporte público, el bloqueo de calles con taxis y barricadas y la movilización de los ciudadanos. En el medio rural, miles de indígenas y campesinos ocuparon carreteras, detuvieron a soldados del Ejército y retuvieron la producción agrícola produciendo el desabastecimiento en los supermercados de las ciudades... A éstos se sumaron los afiliados del Seguro Campesino, maestros, trabajadores petroleros y de la salud, vendedores ambulantes que se movilizaron en varias ciudades del país.”⁴⁴ Alrededor de 15 mil indígenas marcharon sobre Quito.

La fuerza de la movilización podía poner en peligro la estabilidad del régimen. Sin embargo, ante los intentos de la oligarquía guayaquileña de enancarse en esta lucha, el movimiento indígena y los movimientos sociales, resuelven dar un giro hacia el establecimiento de mesas de diálogo sobre los diferentes puntos de la demanda social.

La acción directa del Ministro de Defensa y de las Fuerzas Armadas logra, el 12 de julio, la captura del banquero Fernando Aspiazu: con ello se confirma la ruptura del bloque dominante. La contra respuesta del banquero será la denuncia de la falta de informe al Tribunal Supremo Electoral sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Mahuad por parte del Banco del Progreso y seguramente de otros

⁴³ ÁLVAREZ (2001: 91)

⁴⁴ LUCAS (2000: 43-44)

bancos. La disputa dentro del bloque dominante empieza a destapar ante la conciencia ciudadana los hilos del poder: un Presidente secuestrado desde el financiamiento ilegítimo de la misma campaña presidencial. La ilegitimidad está en el origen.

La respuesta del gobierno muestra la incapacidad de ver el alcance de las demandas de los movimientos sociales. El régimen orienta su acción a la entrega de 300 mil millones de dólares para diferentes obras, pues cree que es posible controlar al movimiento indígena con políticas asistenciales. La CONAIE no acude a las ceremonias de entrega de fondos, pues el problema no está allí, sino en la política global.

En agosto de 1999 se inician las relaciones entre la dirección de la CONAIE, liderada por Antonio Vargas, y la conspiración de los generales, liderada por el General Telmo Sandoval. Se constituye un equipo de dirección compartida para el “Plan A”: la lógica de un golpe militar con legitimación desde la movilización social.

En octubre de 1999 se inicia la preparación del “Plan B”, en alianza con los capitanes, encabezados por César Díaz, Guillermo Rosero y los hermanos Torres: la lógica insurreccional de una refundación de la República desde el poder soberano del pueblo.

El Congreso de la CONAIE se realiza en noviembre del 99. Entran en disputa dos visiones: la una orientada a la preparación de la insurrección; y la otra con una orientación más institucionalista–electoral.

Para la realización del Congreso, Antonio Vargas, obtiene el apoyo de la cúpula militar, interesada en una alianza para la conspiración. La iniciativa parte del General Telmo Sandoval, que entrega vituallas para asegurar la presencia de los delegados adictos a Vargas: aquí emerge la figura del Coronel Gutiérrez, como uno de los encargados de cumplir las disposiciones de la cúpula militar.

El Congreso de la CONAIE reconoce el fracaso de las mesas de diálogo constituidas con el Gobierno, y decide la ruptura con Mahuad, la preparación de un levantamiento indígena para exigir la salida del Presidente y la propuesta de construir Parlamentos indígenas.

La Coordinadora de Movimientos Sociales plantea la ampliación de los parlamentos a todos los “pueblos” del Ecuador, para incluir a todos los actores sociales; y la ampliación de la demanda de renuncia del Presidente a la salida de los tres poderes.

El 11 de enero del 2000 se crea el Parlamento de los Pueblos del Ecuador, como un órgano de doble poder, bajo la Presidencia de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, Obispo de Cuenca y con una dirección compartida por la CONAIE, y la CMS. Se inicia el levantamiento indígena–popular.

EL PLAN B

La clave de la insurrección del 21 de Enero pasa por dos ejes: la construcción de un poder paralelo en torno a los Parlamentos de los Pueblos; y la relación con los militares.

La iniciativa primera en esta relación viene desde la institución armada, en un largo proceso que se inicia en los ochenta. Después de la derrota de Paquisha hay una

profunda reorientación sobre todo en el Ejército hacia una visión de profesionalización ilustrada y de compromiso social. Allí parte una relación con los sectores rurales, sobre todo indígenas, tanto en la Sierra como en la Amazonía, a través de acciones cívicas. La primera relación es más bien asistencialista a favor de los “marginados y humillados”, el militar se ve como un reformador social: una versión tardía del “pretorianismo ilustrado”⁴⁵

“Luego del conflicto de Paquisha, comienza a despuntar en el Ejército, un grupo de oficiales (de mandos medios) con pensamiento de vanguardia, eran algo así como una “**generación ilustrada**”, que fueron adquiriendo poco a poco un gran prestigio y liderazgo dentro de FF.AA. (...) Se preocupan por el adiestramiento de las tropas, creen en un Ejército funcional al servicio ya no de las oligarquías, sino del pueblo necesitado, del indígena abandonado, de los niños desprotegidos, de los marginados y humillados. (...) Y es así como las FF.AA. entran en un gran proyecto nacional de **apoyo al desarrollo y a la comunidad**, especialmente trabajando con los pobres en diferentes campos: salud, educación, agricultura, infraestructura básica, etc. los militares finalmente han salidos de la “torre de marfil” en que los encerró la oligarquía (los cuarteles)”⁴⁶

Esta relación se fortalece en el conflicto del Cenepa. Se produce el encuentro de dos mitos: la proclamación patriótica de las Fuerzas Armadas y la etnización de los movimientos sociales. En medio de la crisis, las Fuerzas Armadas y la CONAIE cuentan con alta credibilidad en la ciudadanía, junto a la Iglesia Católica.

La relación se dinamiza después del levantamiento de julio del 99: ya no se trata de la asistencia al “indígena desvalido”; ahora se trata del acuerdo con el poder indígena.

Pero esta relación se da por dos vías. Con la cúpula militar, interesada en una alianza que subordine al movimiento indígena a la estrategia del golpe militar: el plan A era realizar la marcha sobre Quito y avanzar hacia el Ministerio de Defensa, para solicitar que las Fuerzas Armadas asuman el poder. Al final de la jornada Antonio Vargas todavía intentará como último recurso el regreso al Plan A: “señores generales, nosotros no queremos el poder; queremos que ustedes se hagan cargo del poder; impidan que nos sigan robando, que nos saqueen; impidan que los políticos y los banqueros corruptos nos quiten el pan de la boca, pan que producimos con el sudor de nuestra frente y todos los días; señores generales, asuman el poder, asuman el mando, ¡nosotros no lo queremos!”⁴⁷ Desde esta lógica, la visión desembocará en “la traición de los generales”.

Y con los mandos medios: el plan B se orienta hacia el cerco al Congreso y la instauración del Parlamento de los Pueblos, como órgano de poder popular, y de una Junta de Salvación Nacional, como órgano ejecutivo, con la participación de representantes de los diversos sectores sociales y de los militares.

El libretto inicial de la movilización llegó hasta el Ministerio de Defensa. El miércoles 19, la movilización llega hasta el monumento a Bolívar y solicita una entrevista con el Alto Mando Militar. A pesar de las disposiciones de Mahuad, ésta se realiza y la cúpula militar juega a dos ases: de un lado, dice a los dirigentes indígenas y sociales que

⁴⁵ HUNTINGTON (1968)

⁴⁶ LASCANO (2001: 24 – 25)

⁴⁷ DIETERICH (2000: 103)

cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas; pero al mismo tiempo declara públicamente su respaldo al régimen democrático. La retórica ha cambiado: ya no se trata del respaldo al “gobierno”, sino al “régimen democrático”. El espacio para la conspiración estaba abierto en todas las direcciones.

Sin embargo las evasivas y el doble juego de la cúpula, pone en acción el Plan B, la relación con los mandos medios. Surge una figura confusa: el Coronel Lucio Gutiérrez. Aparece como delegado de la cúpula militar para el enlace con los indígenas: es presentado como tal por el General Telmo Sandoval, en los primeros días de enero, es decir tres semanas antes del 21 de enero. Dentro del Plan A, se le asigna un papel clave, comandar las acciones militares en Guayaquil: ante el cálculo de los límites de la movilización social, la cúpula militar confabulada presenta un plan de control militar de las instituciones y los dirigentes del Puerto. El libreto empieza a prepararse para ello: Gutiérrez es trasladado a Guayaquil; aunque luego es llamado nuevamente a Quito, pues la cúpula empieza sospechar de las acciones autónomas del Coronel.

Pero Gutiérrez también es convocado por los capitanes para que encabece el Plan B: “nada con los generales”.⁴⁸ Se ha creado el mito de la insurrección de los coroneles. Más bien se trata de la insurrección de los capitanes, que cuentan con el apoyo únicamente de Gutiérrez, aunque éste actúa más bien como invitado. No se establecen compromisos con otros coroneles; aunque en las filas castrenses, sobre todo en los institutos de formación militar, existe un clima de inquietud y descontento. La actitud de Gutiérrez es ambigua: evade el compromiso, el cerco debía cerrarse el 20 de enero en la noche. El capitán Cesar Díaz le anuncia a Gutiérrez: “si no va, lo hacemos nosotros”. A la mañana siguiente Gutiérrez aparece a la cabeza de los oficiales insurrectos.

Un debate atraviesa los análisis históricos: ¿el papel decisivo está en las estructuras, en las fuerzas colectivas, o en los individuos? Lucio Gutiérrez se coloca en el centro del proceso; sobre todo aparece como el beneficiario en el reconocimiento electoral. Las interpretaciones en torno a las conspiraciones del poder pretenden ver un plan premeditado: los hilos manejados desde la cúpula militar, como argumenta Vladimiro Álvarez; o desde la embajada americana, como insinúan algunas versiones de izquierda. Quizás la versión más ajustada a los hechos es que Lucio, más que un actor, es un resultado del proceso: al final encarna el interés del poder constituido para continuar el modelo y controlar la movilización social. Pero también es el resultado de los límites del poder del movimiento indígena y de los movimientos sociales.

La presencia de los mandos medios rompe el libreto de la cúpula militar. Aunque la ruptura decisiva lo realiza la presencia del Coronel Fausto Cobo, “sin esa intervención, no hubiera pasado nada. La promoción del 68 era la que tenía prestigio y mando; Gutiérrez era un coronel recién ascendido.”⁴⁹ “La presencia del coronel Fausto Cobo en el Congreso Nacional – dice el Coronel Brito - precipitó los hechos y cambió el panorama. Para los verdaderos conspiradores este hecho fue un baldazo de agua fría porque el libreto preparado tenía un nuevo personaje, cuya presencia hacía tabla rasa todo lo planificado.”⁵⁰ Se refiere a la conspiración del Alto Mando militar.

⁴⁸ Entrevista al Capitán César Díaz, octubre 2002.

⁴⁹ Entrevista al Coronel Jorge Brito, abril 2003.

⁵⁰ DIETERICH (2000: 92)

El Coronel Cobo es el responsable principal de la estrategia de seguridad de las Fuerzas Armadas. Pocos días antes ha presentado ante la cúpula militar los posibles escenarios para responder ante la crisis, que van desde la rectificación hasta la renuncia para la sucesión presidencial, y hasta el peligro de una rebelión popular. La incorporación de Cobo es espontánea: llega con una posición inicial de pedir a sus alumnos suspender las acciones y buscar un acuerdo con la cúpula militar, para examinar una salida institucional de las Fuerzas Armadas. Sólo la acción de los capitanes modifica su actitud.

La cúpula militar intenta retomar el control: envía a los coroneles Jorge Brito y Gustavo Lalama a pedir el retiro del Coronel Cobo. Pero el proceso está lanzado. En la Presidencia del Congreso, los capitanes, estudiantes de la Academia de Guerra, impiden la transmisión de un primer mensaje del Coronel Cobo llamando a la reflexión a los insurrectos; y le conminan a su Director a ser coherente con su prédica. El Coronel Cobo interviene públicamente y llama a los militares a respaldar la insurrección, bajo la evocación de la Revolución Juliana. Los pronunciamientos de respaldo de las unidades militares empiezan a multiplicarse y se ponen a las órdenes de los Coroneles.

EL GOLPE MILITAR

La cúpula militar también ejecutaba su libreto: al fin del año 1999, entre los escenarios posibles presentados al Presidente Mahuad, para enfrentar la crisis, surge la imagen de la sucesión presidencial.

Al filo de esa retórica actúan el 21 de enero, para ver cuál es el desenlace. A las 10 de la mañana, el General Mendoza en nombre del Alto Mando militar manifestó que “las FF.AA. respaldan el orden democrático, y han resuelto pedir al Presidente de la República **que adopte una decisión constitucional**”. Y cuando Mahuad pregunta “a qué decisión se refieren, el General Carlos Mendoza le dijo: “**!!! su renuncia, señor Presidente!!!**”⁵¹

El General Carlos Moncayo, Jefe de la Seguridad de la Casa Presidencial, anuncia que no puede garantizar la seguridad del Presidente ante el avance de las multitudes; y se realiza un operativo para trasladar a Mahuad a la Base Aérea Mariscal Sucre.

A las 14:30 los Comandantes de las tres ramas de las FF.AA. y el Comandante General de la Policía deciden “que el General Carlos Mendoza salga en una rueda de prensa, acompañados de los coroneles Brito y Lalama, para informar a la Nación que las FF.AA. retiraban el respaldo al Presidente Mahuad y asumían temporalmente el control del país.”⁵²

A las 15:10 Mahuad “se dirigió al país y, en esencia, dijo que no iba a renunciar y que si los militares querían darle un golpe de Estado debían hacerlo de manera frontal.” Mahuad intenta retomar la iniciativa acudiendo a un poder dirimente superior: el poder norteamericano. “La estrategia consistía en denunciar el golpe de Estado que ya era evidente e incrementar una ofensiva internacional en contra, liderado por los Estados

⁵¹ ÁLVAREZ (2001: 49)

⁵² DIETERICH (2000: 93)

Unidos.”⁵³ La percepción era clara para el Presidente: la preocupación no estaba en la movilización social, sino en el golpe de Estado militar.

A las 15:40, “el general Carlos Moncayo, a nombre del Alto Mando, en una declaración, reiteró públicamente que las Fuerzas Armadas le retiraban su apoyo a Jamil Mahuad.”⁵⁴ Hasta aquí el libreto del 97: las Fuerzas Armadas actúan como dirimientes de los conflictos políticos. No aparece ninguna palabra sobre la “sucesión constitucional”.

A las 18:15, los generales informan que han asumido el poder y se dirigen al Palacio de Gobierno a posesionarse. “Ante la grave crisis política, económica y social. Para mantener la armonía y la paz entre ecuatorianos, por decisión *unánime* del Mando y apoyo general del pueblo ecuatoriano, *las Fuerzas Armadas asumen el poder de la Nación*. Es nuestra representatividad histórica la que nos ha comprometido en estas circunstancias, *similares a tres ocasiones anteriores, en que hemos tenido que reestructurar administrativa, económica y políticamente el país.*”⁵⁵ El discurso está claro: las Fuerzas Armadas asumen el poder, como lo han hecho en tres ocasiones anteriores. Seguramente se refieren a la Revolución Juliana, la Junta Militar del 63, y el Gobierno Revolucionario y Nacionalista de Rodríguez Lara del 72. No hay ninguna palabra sobre la “sucesión presidencial”; el objetivo es más bien “reestructurar administrativa, económica y políticamente el país”. La retórica de la estrategia de “engaño” a los indios para la “sucesión constitucional” se construye *a posteriori*, en los relatos de la gran prensa.

La Proclama de los Generales es leída por el Coronel Jorge Brito:

"4. Por tal motivo, a partir de este momento asumimos los plenos poderes hasta restablecer el orden y la paz ciudadana.

5. Las FF.AA. y la PP.NN., fundamentadas en sus valores y principios, durante nuestra permanencia en el poder promoveremos una etapa de reestructuración y depuración del Estado, que constituyan bases sólidas que respondan al clamor del pueblo y que garanticen un pronto retorno a la institucionalidad democrática."⁵⁶

Tampoco aquí hay ninguna palabra sobre la “sucesión constitucional” y más bien se insiste en una “etapa de reestructuración y depuración del Estado, que constituyan bases sólidas que respondan al clamor del pueblo y que garanticen un pronto retorno a la institucionalidad democrática”. Seguramente esa etapa duró tres horas, suficientes para depurar al Estado de la presencia molesta de las masas.

La actuación del Coronel Brito muestra el sentido de la estrategia militar, descuartizada entre la posibilidad de una alianza con la insurrección popular y la necesidad de responder a la integridad de la institución armada: encargado de disuadir a los militares insurrectos, permanece en un territorio ambiguo dentro del Palacio Legislativo, espacio del Parlamento de los Pueblos, lo que crea la imagen de participación; pero retorna al Palacio de Gobierno, espacio de los Generales, para buscar la reintegración del orden.

⁵³ EL COMERCIO (2000: 57 – 58)

⁵⁴ EL COMERCIO (2000: 57)

⁵⁵ EL COMERCIO (2000: 59)

⁵⁶ EL COMERCIO (2000: 64). El subrayado es mío.

Sobre todo en tiempos de crisis, el sentido se construye en el proceso; la estrategia de conjunto es más un resultado construido en medio de los diferentes juegos de fuerzas, que un plan predefinido. Esta es una diferencia clave con los tiempos de realización de la hegemonía en que el sistema funciona en forma “automática”, y se puede prever en gran parte su trayectoria, marcada por el poder constituido y por la norma.

Este sentido es posible verlo en la reconstrucción de la trayectoria de la fuerza armada durante el proceso democrático. En términos esquemáticos podemos diferenciar tres fases desde el retorno constitucional:

Después de la Dictadura Militar, la fuerza armada tiene que afrontar el conflicto de Paquisha y sufre una derrota. En respuesta, se consolida una visión profesionalista ilustrada para prepararse a la defensa territorial en la frontera Sur y una línea de compromiso social.

El triunfo militar en la Guerra del Cenepa, fortalece la imagen de las Fuerzas Armadas. Estas toman autonomía respecto a las fuerzas políticas dominantes y pasan a constituirse en dirimientes de los conflictos políticos. Los héroes del Cenepa representan una voz ética no sólo dentro de la institución armada, sino también en la relación con la sociedad. Las negociaciones diplomáticas para el Tratado de paz con el Perú, son vistas como una renuncia a la victoria lograda en el campo militar. Esto profundiza el distanciamiento con las fuerzas tradicionales, sobre todo dentro de las filas del Ejército.

La conspiración para un reordenamiento político profundo no se gesta, como en los golpes de Estado, dentro de los cuarteles. El centro de reflexión y debate está en los ámbitos universitarios y de formación: la Academia de Guerra y la Escuela Politécnica del Ejército. El 21 de Enero, serán los alumnos de la Academia de Guerra y de la ESPE los que abran las puertas al ingreso de los indígenas y de los movimientos sociales al parlamento. La fisura dentro de la institución armada viene desde adentro.

TRES RETÓRICAS SOBRE EL PLAN A

Las tres estrategias confrontadas en los acontecimientos del 21 de enero, se presentan posteriormente en tres retóricas sobre la interpretación de los acontecimientos. El punto de cruce está en la lectura del Plan A: la actuación de la cúpula militar ante la movilización indígena y social y la participación de los mandos medios.

Desde el poder constituido, a través de su vocero, el Presidente Mahuad, la retórica gira en torno al “golpe de Estado”. La actuación de Mahuad el 21 de enero se centra en destapar el golpe y buscar el respaldo del poder internacional. Esta visión se convertirá en el relato del “golpe *militar* atrás de los ponchos”. Desde la visión del poder, los indios son apenas base de maniobra, no tienen posibilidad de iniciativa propia. La política es asunto de la élites; el límite es la necesidad de una “democracia de liderazgo plebiscitario”. El *demos* tiene el papel de legitimar a la élites. La democracia está en el manejo de la constitucionalidad.

El discurso de los indios sobre el Plan A, gira en torno a la retórica de la “traición de los generales”: “El 21 nosotros hemos visto la traición de parte de los generales; no digno

de los coroneles para abajo que estuvieron con el pueblo”, señala Antonio Vargas, Presidente de la CONAIE.⁵⁷

Los generales establecieron un compromiso con los indios desde meses atrás: la estrategia del “engaño” no tiene asidero, pues la relación y los planes no se trazan recién el 21 de enero. En los compromisos juega un papel central el General Telmo Sandoval, que llega a participar en ceremonias shamánicas, para sellar los acuerdos. Durante el proceso hay una doble percepción de los actores sociales sobre la relación con la cúpula militar: mientras del lado indígena se privilegia el acuerdo para el éxito de la rebelión; desde el lado de los movimientos sociales se sospecha el alineamiento de los generales con el poder constituido, y, por tanto, se busca la fractura de las Fuerzas Armadas como condición para la insurrección. Empero en ningún momento se abordó la posibilidad de un trabajo autónomo dentro de las Fuerzas Armadas: el tema militar estuvo encomendado a los militares.

A posteriori se consolida una tercera versión: el relato de la “sucesión constitucional”, asentada en la estrategia del “engaño” a los indios. Ya no se trata de la utilización del poder tras los ponchos, sino de la presencia de un sujeto trascendental, capaz de planificar la trayectoria del proceso. Es una historia desde el poder: la historia oficial la escriben los vencedores. Es el poder del funcionamiento sistémico de la democracia, que actúa como principio de autolegitimación.⁵⁸

EL PODER DEL SISTEMA

La estrategia insurreccional logra su propósito: aísla la capacidad de decisión para concentrarla por un tiempo corto en manos de los insurrectos, los indios, los movimientos sociales y los mandos medios militares.

El cerco indígena al Congreso y a la Corte deja fuera a un sistema de partidos que no cuenta con organización social, sino que funciona como aparatos cupulares y empresas electorales, en torno a los juegos parlamentarios. Cerrado el espacio material de reunión, el Palacio Legislativo, los partidos se quedan sin espacio político de actuación. Febres Cordero, el dueño del país, se refugia en su poder local y amenaza con la secesión de Guayaquil, aunque al mismo tiempo empieza a preparar maletas para el consabido viaje salvador a Miami. Los vuelos estaban listos en la Base de Manta. Hurtado, intenta convocar a una movilización paralela en Quito y logra reunir a un centenar de personas.

El poder constituido tampoco puede acudir a las Fuerzas Armadas, como lo ha hecho en otras oportunidades, para restablecer el orden. Éstas se encuentran en su propio juego: dirimientes del conflicto. Doble juego: las tentativas de un golpe militar en la cúpula; los compromisos con un cambio profundo en los mandos medios.

El desenlace de estas dos tendencias se realiza entre dos órdenes: la negativa de los mandos medios a cumplir la orden de los generales de disparar contra la movilización social; y la negativa de los mandos medios a llevar hasta el final la estrategia

⁵⁷ VARIOS (2001: 301)

⁵⁸ Este carácter del funcionamiento del sistema es absolutizado en las teorías de Luhmann, bajo la noción del funcionamiento autopoiético.

insurreccional y más bien iniciar negociaciones con los generales, para evitar la división de la institución armada y el enfrentamiento sangriento.

El relato de Paco Velasco es gráfico: "Al frente de la manifestación iba gente de la calle, jóvenes que se iban sumando, luego estaban algunos soldados con sus armas en ristre. Cada cuadra paraban, había desacuerdos, tensión y nerviosismo. -Que no encabecen la marcha los que tienen armas, que nos vean que llegamos sin armas. -No, hay que resguardar la marcha, que vayan adelante los militares. Las alambradas cerca a Palacio estaban abandonadas y las fuerzas militares de la guardia presidencial se concentraron en la propia Plaza Grande. Allí podrían sonar los tiros."⁵⁹

El límite estaba en la concepción profesional de los mandos medios, en particular de los coroneles, que no podían aceptar una fractura de las Fuerzas Armadas. La condición estaba en la visión de paz activa de los pueblos indígenas y los movimientos sociales, marcada inconscientemente por concepciones gandhianas: no era posible pasar a niveles de violencia activa.

El límite fundamental en las filas insurrectas estaba en la carencia de un partido político, de una dirección política, que pueda unificar las diversas tendencias y tomar iniciativas que lancen el proceso hacia delante: el 21 de enero ya no era un levantamiento más, sino la toma del poder, ya no era una acción de resistencia, sino un momento positivo del poder popular; pero en las filas populares no había plena conciencia ni preparación para este paso.

La ausencia de esa fuerza dirigente se mostró sobre todo en el momento decisivo del paso a la negociación con los generales; la otra orden posible hubiera sido el avance de las brigadas insurrectas hacia la capital. El tema militar quedó en manos de los militares; no se había constituido un mando unificado. El compromiso para la negociación fue reconocer al Alto Mando, lo que implicaba restablecer la cadena de mando, pero también ratificar la Junta de Salvación. Restablecida la cadena de mando, la decisión había sido devuelta al poder constituido; sólo faltaba un paso final: la devolución a sus verdaderos detentadores.

El mito del patriotismo de las Fuerzas Armadas como institución, impidió a los dirigentes de los movimientos sociales ver el real carácter de las Fuerzas Armadas, que al final cumplió su papel institucional: garantizar el orden constituido.

Pero mientras los partidos políticos se quedaron sin espacio, el juego del poder se desplazó a la acción de los medios: empieza a funcionar la democracia "teledirigida". La estrategia insurreccional se olvidó del "cuarto poder". En manos de los medios y, sobre todo, de la televisión, la correlación de fuerzas se metamorfoseó.

Aquí hay un tratamiento diferente de los medios respecto al acontecimiento: mientras la radio sigue el ritmo del acontecimiento, trasmite en vivo y en directo, desde la escena de los hechos; la televisión, en particular Telesistema, construye un relato desde el pronunciamiento de los mandos militares.

"Los canales de televisión no podían pasar por microonda algunas cosas, porque les habían cortado los cables. Ahí dimos un buen golpe en la radio que fue como un pequeño premio al trabajo de seguir todo paso a paso, de sacar todo en vivo rompiendo

⁵⁹ VELASCO (2000)

la programación habitual. Ese golpe sucedió en cuanto hizo su ingreso el Coronel Fausto Cobo, director de la Academia de Guerra del Ejército, sólo nosotros difundimos en vivo y en directo sus primeras declaraciones. Además quedó como la única y exclusiva grabación, como bien lo reconoció el diario El Comercio, porque a Bernardo Abad le arrebataron el vídeo cassette y se lo dañaron."⁶⁰

Toda la retórica creada anteriormente a través sobre todo de la televisión respecto a la amenaza indígena, ahora les permitía actuar como guías de la opinión pública y restablecedores del orden. "La gente en las llamadas telefónicas (de la mañana del 21) no sabía si apoyar a los indígenas que asediaban a ese desprestigiado congreso o hacer caso de algunas imágenes de televisión que los hicieron aparecer como unos salvajes que pintarrajeaban las caras de funcionarios que habían quedado atrapados en algunas dependencias. De todas maneras las llamadas telefónicas que salían al aire decían que Mahuad debía salir ya."⁶¹

La interrupción del proceso de radicalización de la insurrección deja a los mandos medios que informaron su adhesión, sin posibilidad de actuar: el balance de los coroneles presentes en la Presidencia del Congreso llegaron a establecer el respaldo de la mayoría de las fuerzas terrestres; empero los jefes de brigadas, enfrentados a los *media*, ratifican su compromiso con la institucionalidad. El cerco insurreccional se ha roto por el lado del funcionamiento sistémico del poder: los *media* han operado como su demiurgo.

Empero hay un momento clave previo. El poder se define en su forma extrema en el monopolio de la violencia legitimada, en el control del poder de la fuerza. A pesar de que la insurrección contaba con un apoyo mayoritario de los mandos medios, encontró resistencia desde la cúpula militar cuando la trayectoria tomó la forma de una insurrección popular-militar. Dos procesos de resistencia: la presión del funcionamiento institucional y la amenaza de la fuerza contra los insurrectos; la amenaza de la acción militar contra el Palacio Legislativo y la resistencia de las brigadas adictas a la cúpula, sobre todo la Brigada Patria.

El momento decisivo se presenta en torno a las 15:00 horas del 21 de enero. Bajo la coordinación del Coronel Cobo se contabilizan los apoyos de la unidades militares a la rebelión. El Coronel Gutiérrez no tenía mayor representatividad dentro de las filas castrenses. El cálculo del apoyo logrado estaba en torno al 70% del Ejército. Las tropas insurrectas, en particular la Brigada Galápagos, solicita autorización para marchar sobre Quito.

La orden de avanzar sobre la Capital podía desembocar en una fractura de las Fuerzas Armadas y en un enfrentamiento violento. Pero ni los militares insurrectos, ni los movimientos sociales estaban preparados para rebasar el límite de la violencia legítima.

El peligro de un enfrentamiento y del derramamiento de sangre, de un lado, y la preocupación de la ruptura de la institución armada, de otro, bloqueó esta posibilidad. No se trataba de una resolución accidental; más bien allí se condensaba un largo camino transitado por los movimientos sociales ecuatorianos que no se han desplegado dentro de tradiciones de guerra y violencia; y también el proceso de los mandos militares

⁶⁰ VELASCO (2000)

⁶¹ VELASCO (2000)

medios, marcados por una fuerte visión institucional y profesional del papel de las Fuerzas Armadas.

En ese punto se define el desenlace del proceso: la salida era buscar un acuerdo con la cúpula.

En la historia de las insurrecciones populares en el Ecuador, éste ha sido el tope: en la Gloriosa del 44, después del triunfo, la dirección ordena el desarme y el llamado a Velasco. Ahora este límite adopta una forma diferente: se niega el permiso de las brigadas militares a avanzar sobre Quito. Un tema inconcluso para las estrategias populares es el de la violencia.

Los insurrectos caminan al Palacio de Carondelet para establecer un acuerdo con la cúpula militar. La decisión retorna a la cadena de mando: los generales aún intentan realizar su estrategia de golpe militar con legitimación de la movilización indígena y aceptan la conformación de un Triunvirato encabezado por el general Carlos Mendoza, Comandantes de las FF.AA. Pero las condiciones se han modificado: ya no opera el dispositivo de la insurrección, sino el dispositivo sistémico. Ahora los centros de poder tienen nuevamente sus canales de comunicación. La sorpresa estratégica ha sido quebrada.

Lucio Gutiérrez inicia un largo camino de renuncia a los compromisos con los mandatos de la insurrección. Los militares insurrectos regresan a sus casas; la iniciativa está en el orden regular. Pero también los actores sociales y, en particular, los indígenas, abandonan la escena y regresan a la concentración en el Ágora de la Casa de la Cultura. Apenas queda como símbolo un equipo de trece dirigentes indígenas y sociales que intentan armar el nuevo equipo de gobierno y los primeros decretos; y un equipo de militares, encabezados por el Coronel Brito, para garantizar la seguridad de un Triunvirato que se disuelve.

Y el punto de presión es simple: se concentra en la cabeza, en el General Mendoza, en un triple movimiento. Dentro del grupo de generales, Telmo Sandoval ve frustrado su intento de encabezar el Triunvirato y pone en juego el mecanismo de la sucesión constitucional, que lo ha mantenido en reserva, en contacto con el Vicepresidente de la República. La presión de la embajada norteamericana va por el lado de la amenaza del aislamiento del nuevo régimen y la memoria de los antiguos acuerdos: "como dice el diario *The New York Times*, ... la intervención de la administración Clinton pesó, de manera decisiva, para que los militares devolvieran el poder."⁶² La presión de la familia se desenvuelve a través del dispositivo del gusto racista. El sistema vuelve a su funcionamiento normal. Es tiempo de que la formalidad constitucional sea restablecida.

Pero para ello había que reacondicionar el relato: desde el inicio, el Alto Mando tenía una estrategia constitucional. El héroe era el Comandante de la FFAA. "Mendoza se vio obligado a enfrentar dos crisis que sacudieron a la democracia y recibió dos condecoraciones. En la primera, el general Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur del Ejército de EE.UU., lo condecoró el 18 de mayo de 1999 por "preservar la democracia durante los conflictos de marzo y abril de aquel año"; la segunda medalla a la

⁶² EL COMERCIO (2000: 171). En la madrugada del 22, en la reunión con los Generales en el Ministerio de Defensa, ante los reclamos por la "traición", no hubo respuesta pública. Pero a salida uno de los generales nos decía: "es imposible irse contra el poder de los Estados Unidos".

"Excelencia profesional" se la impuso el presidente Noboa el 25 de febrero (del 2000), día en el que dijo adiós a las armas."⁶³

La ausencia de una conducción política unificada desgasta el lapso de tres horas que media entre el juramento del Triunvirato y la renuncia del General Mendoza, en un debate de representación. Cuando se conoce la renuncia, apenas se intenta un giro para llamar al General Moncayo o al General Sandoval, el verdadero autor de la conspiración. Pero éste ya estaba empeñado en otro juego.

EL ESTIRAMIENTO CONSTITUCIONAL

El Vicepresidente Noboa Bejarano asume la Presidencia en la madrugada del 22 de enero, en un proceso viciado de inconstitucionalidad: se posesiona ante la Cúpula Militar. El Congreso, en una sesión extraordinaria por su irregularidad, bajo la coordinación de Febres Cordero, legaliza tardíamente lo actuado. Aunque también ahora ha tenido que acudir a un manejo instrumental de la Constitución.

"Para el país el cambio de mando por la vía de una enredada salida constitucional, también significó un cambio de rumbo. Aunque la dolarización siguió el camino trazado por el defenestrado régimen, nuevos actores saltaron a la palestra pública. Con Mahuad se fue uno de los episodios más dramáticos de la historia económica del Ecuador, aunque sus secuelas todavía pesan demasiado sobre los hombros de la población. El feriado bancario y el congelamiento de los depósitos, entre otras cosas, llevaron al despeñadero al gobierno de la Democracia Popular (DP)."⁶⁴

Finalmente en el desenlace regresa el viejo debate: el legislador modifica la ley de acuerdo a las circunstancias; la Constitución no opera como Carta Magna, sino como punto flexible y temporal de acuerdo. La separación entre poder constituido y poder constituyente se difumina y opera mientras no rebasa el límite del orden. A pesar de los juegos verbales sobre un "golpe constitucional", en cuanto desembocó en la sucesión constitucional, o la aceptación de un procedimiento distinto al establecido por la Carta Magna por está sola y última oportunidad, las cuentas no salen ni siquiera desde una visión minimalista y procedimental de la democracia.

"Las asambleas constituyentes han sido reemplazadas por interpretaciones legales y constitucionales que en última instancia se han convertido en el factor de preservación de la vigencia constitucional. Esa ha sido la forma en que se ha sorteado a los dos golpes de Estado ocurridos en el actual período constitucional (1997 y 2000), pero también ha sido la práctica utilizada para enfrenar los bloqueos políticos entre ejecutivo y legislativo. En términos prácticos no se ha roto el orden constitucional, pero no se puede decir lo mismo en términos conceptuales, especialmente si se considera que las instituciones y los procedimientos son partes constitutivas de la democracia."⁶⁵

El estiramiento constitucional se vuelve un recurso permanente para buscar las salidas a la crisis. "El mecanismo adoptado (en la destitución de Bucaram) se basó en la disposición constitucional que establece entre las causas de terminación de las funciones presidenciales la "incapacidad física o mental declarada por el Congreso Nacional

⁶³ SINALLATAK (2001)

⁶⁴ SINALLATAK (2001)

⁶⁵ PACHANO (2003: 14)

(artículo 75, literal d). Reiterando la violación constitucional, el congreso designó a un presidente interino para un período que tampoco correspondía a los establecidos. La segunda (destitución presidencial) ocurrió luego de una asonada civil-militar protagonizada fundamentalmente por las organizaciones indígenas, y se justificó en el abandono del cargo por parte del presidente. Tampoco en esta oportunidad se respetaron las formalidades democráticas."⁶⁶

Ahora el camino fue todavía más tortuoso. El cerco indígena y la irrupción de los mandos medios impidió que el Congreso actúe como el espacio de decisión, como en febrero del 97. Esta es también una diferencia con el desenlace en la caída de Fujimori: el Congreso decide la descalificación del Presidente fugado y nombra como sucesor al Presidente del Congreso, una vez cumplido el rito legal de la renuncia de los dos vicepresidentes.

Había que resolver, aunque sea tardíamente dos problemas: la ausencia de la renuncia de Mahuad, por lo cual en un estiramiento de la Constitución se crea la figura del "abandono del poder"; y la posesión del nuevo Presidente ante la Junta de Generales, por lo cual se legaliza lo actuado fuera de los procedimientos dispuestos por la Constitución.

"El resultado de estos comportamientos ha sido la conformación de una *normatividad flexible*, sujeta a tantas interpretaciones cuantas sean necesarias para conformar mayorías pasajeras o para salir del atolladero provocado generalmente por esa misma conducta de los actores. Las normas, comenzando por la misma constitución, no han sido el marco de referencia para el desempeño político, sino más bien uno de los componentes de la negociación. De esta manera ha sido imposible lograr que la acción se enmarque en disposiciones estables y de aceptación general. Por el contrario, la relación entre ambos términos se ha producido en sentido inverso, esto es, la acción política ha sido la que ha determinado el marco normativo, que por consiguiente ha pasado a depender directamente de las necesidades coyunturales"⁶⁷

Más allá de la supremacía de la Constitución, se abre una práctica diferente, sujeta a los juegos del poder. "En cualquier situación, aun frente al problema más pequeño, se ponen en cuestión los pilares básicos del ordenamiento político y hacia ellos se dirigen las acciones e impugnaciones de los actores sociales y políticos. De esta manera, los conflictos propios de la política cotidiana se trasladan al nivel del régimen político y se convierten en una impugnación de sus bases"⁶⁸

El poder se autolegitima. Puede ampliar la frontera de la constitucionalidad para justificar *ex post* los hechos del poder constituido y exorcizar las emergencias amenazantes de los nuevos poderes constituyentes.

Pero en realidad lo que hace es modificar la estrategia de control: desconstituir el bloque histórico basado en la unidad del movimiento indígena y los movimientos sociales; y establecer un nuevo terreno de alianza-subordinación entre el poder local y el poder transnacional. Con ello, la rebelión del 21 de enero será la última de su tipo.

⁶⁶ PACHANO (2003: 14)

⁶⁷ PACHANO (2003: 14)

⁶⁸ PACHANO (2003: 16)

Empero las causas que motivaron el 21 de enero no han sido resueltas. Los ciclos de las crisis arriba pueden retornar y por esta puerta pueden regresar, con nuevos ropajes, los actores excluidos.